

sin perjuicio de su consideración de tales respecto de otros productos de análoga o distinta naturaleza que comercialicen en el mismo estado en que los adquirieron.

Segundo.—Que la suma de las contraprestaciones correspondientes a las entregas de dichos bienes a la Seguridad Social o a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales efectuadas durante el año precedente, hubiese excedido del 80 por 100 del total de las realizadas;

Considerando que el artículo 142, número 3, del Reglamento del Impuesto dispone que en el supuesto de que el sujeto pasivo a quien sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia realice otras actividades empresariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, la del comercio minorista sometida a dicho régimen especial tendrá, en todo caso, la consideración de sector diferenciado de la actividad económica, a efectos del régimen de deducciones, obligaciones formales, registrales y contables y demás peculiaridades establecidas en relación a este régimen, cualesquiera que sean los porcentajes de deducción aplicables en los demás sectores.

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares:

La elaboración de pan o pasteles se considerará, en todo caso, transformación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los sujetos pasivos que realicen esta actividad no estarán sometidos ni podrán acogerse, por lo que se refiere a las ventas de tales productos transformados por ellos mismos, al régimen especial del recargo de equivalencia, debiendo tributar en el Régimen General del Impuesto o, en su caso, en el régimen simplificado cuando proceda.

No obstante, estarán sujetos al régimen especial del recargo de equivalencia por las actividades de comercialización de productos no transformados por ellos mismos los sujetos pasivos a que se refiere el párrafo anterior, siempre que concurren los requisitos subjetivos y objetivos establecidos en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Madrid, 18 de noviembre de 1986.—El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

32234 *RESOLUCION de 20 de noviembre de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 17 de marzo de 1986 por el que la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Visto el escrito de fecha 17 de marzo de 1986 por el que la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 28);

Resultando que la referida Asociación es una organización patronal autorizada para formular consultas vinculantes relativas a dicho tributo, en virtud de lo dispuesto en la citada Ley;

Resultando que es objeto de consulta la determinación del momento en que ha de computarse el plazo de caducidad de un año para efectuar la deducción de las cuotas impositivas soportadas en los supuestos a que se refiere el artículo 77, número 1, párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 31);

Considerando que el artículo 65, número 3, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que el derecho a la deducción de dicho tributo sólo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al período de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no haya transcurrido el plazo de un año, contado a partir del nacimiento del mencionado derecho;

Considerando que, si bien el artículo 64, número 1, del aludido Reglamento prescribe que el derecho a la deducción nace en el momento en que se devenguen las cuotas deducibles, el artículo 77, número 1, del mismo Reglamento establece que los empresarios o profesionales sólo podrán deducir las cuotas soportadas por la adquisición de terrenos destinados al ejercicio de una actividad empresarial o profesional realizada con anterioridad al comienzo efectivo de las operaciones sujetas al impuesto a partir del momento en que inicien el ejercicio habitual y efectivo de las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al impuesto citado.

En consecuencia, es en dicho momento en el que deberá entenderse nacido el derecho a la deducción, siempre que se

cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos para la realización de las deducciones anteriores al ejercicio de las actividades empresariales o profesionales.

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta formulada por la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios:

Primero.—El derecho a la deducción sólo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al período de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no haya transcurrido el plazo de un año, contado a partir del nacimiento del mencionado derecho.

Segundo.—El derecho a la deducción de las cuotas soportadas en la adquisición de terrenos nace, por regla general, en el momento en que se devenguen las cuotas deducibles.

No obstante, tratándose de adquisiciones de terrenos efectuadas con anterioridad al ejercicio de las actividades empresariales o profesionales, y siempre que concurren los requisitos establecidos en el artículo 77 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación a las deducciones anteriores al comienzo de las actividades empresariales o profesionales, el derecho a deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones de dichos terrenos se considerará nacido en el momento en que, habiéndose devengado las cuotas deducibles, se inicie habitual y efectivamente, la realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios correspondientes a la actividad empresarial o profesional en las que se utilicen dichos terrenos.

Madrid, 20 de noviembre de 1986.—El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

32235 *RESOLUCION de 20 de noviembre de 1986, de la Dirección General de Tributos relativa al escrito de fecha 27 de junio de 1986, por el que el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Visto el escrito de fecha 27 de junio de 1986 por el que el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona formula consulta vinculante en relación al impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que el referido Colegio profesional está autorizado para formular consultas vinculantes en relación a dicho tributo de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 28);

Resultando que determinadas Empresas prestan los siguientes servicios:

Primero.—Confección y preparación de comidas utilizando o no los alimentos aportados por los clientes.

Segundo.—Distribución de comidas.

Tercero.—Servicio de bar, con o sin utilización de los productos alimenticios suministrados por los clientes.

— Aseo y limpieza de instalaciones.

— Lavado de ropa.

— Preparación de camas.

— Evacuación y reposición de lencería.

— Reposición de fungibles de aseo.

— Limpieza y aseo de habitaciones.

— Mantenimiento de instalaciones y mobiliario.

— Tratamiento de lencería;

Resultando que los mencionados servicios se prestan a establecimientos hospitalarios que, en ocasiones, gozan de exención del impuesto por los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria en ellos prestados, o bien a los clientes de dichos establecimientos;

Resultando que se consulta si los referidos servicios están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en otro caso, la determinación del tipo impositivo aplicable;

Considerando que el artículo 3.º de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido («Boletín Oficial del Estado» del 9), dispone que están sujetas al impuesto las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales, a título oneroso, con carácter habitual u ocasional en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional y las operaciones sin contraprestación comprendidas en el artículo 6.º, número 3 y en el artículo 7.º, número 3 de dicha Ley;

Considerando que si bien el artículo 13, número 1, apartado 2.º del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 31), preceptúa que están exentas del impuesto las prestaciones de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por Entidades de Derecho público o por Entidades o establecimientos